



# Asamblea General

Quincuagésimo séptimo período de sesiones

Documentos Oficiales

Distr. general

14 de noviembre de 2002

Original: español

---

## Tercera Comisión

### Acta resumida de la tercera sesión

Celebrada en la Sede, Nueva York, el lunes 30 de septiembre de 2002, a las 15.00 horas.

*Presidente:* Sr. Wenaweser ..... (Liechtenstein)

## Sumario

Tema 100 del programa: Prevención del delito y justicia penal (*continuación*)

Tema 101 del programa: Fiscalización internacional de drogas (*continuación*)

---

La presente acta está sujeta a correcciones. Dichas correcciones deberán enviarse, con la firma de un miembro de la delegación interesada, y *dentro del plazo de una semana a contar de la fecha de publicación*, a la Jefa de la Sección de Edición de Documentos Oficiales, oficina DC2-750, 2 United Nations Plaza, e incorporarse en un ejemplar del acta.

Las correcciones se publicarán después de la clausura del período de sesiones, en un documento separado para cada Comisión.

02-61034 (S)



*Se declara abierta la sesión a las 15.00 horas.*

**Tema 100 del programa: Prevención del delito y justicia penal** (*continuación*) (A/57/3, A/57/64, A/57/135, A/57/152 y Add.1, A/57/153, A/57/154, A/57/158 y Add.1 y A/C.3/57/L.2, A/C.3/57/L.3, A/C.3/57/L.4 y A/C.3/57/L.5)

**Tema 101 del programa: Fiscalización internacional de drogas** (*continuación*) (A/57/3, A/57/88, A/57/127 y A/57/203)

1. **La Sra. Viotti** (Brasil) se adhiere a la propuesta presentada por Costa Rica en nombre del Grupo de Río y expresa su satisfacción por el informe del Secretario General sobre el fortalecimiento del Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal (A/57/153), en que se destacan las actividades para promover la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres Protocolos. La Convención y sus Protocolos se han presentado al Congreso Nacional del Brasil para su aprobación. En el informe también se examina el proceso de elaboración del proyecto de Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que debe concluir para finales de 2003. Su delegación apoya la labor del Comité Especial encargado de elaborar el proyecto de Convención, en especial su empeño por lograr la exhaustividad y buscar el equilibrio entre medidas preventivas y coercitivas.

2. La lucha contra la delincuencia organizada transnacional y la promoción de la cooperación internacional en la materia son asuntos de máxima prioridad para el Brasil. En nuestras actividades nacionales sobre prevención del delito y justicia penal se han utilizado documentos preparados por las Naciones Unidas, en particular las propuestas de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal. Muchas de sus recomendaciones se han tenido en cuenta al redactar y poner en práctica el Plan de Seguridad Pública del Brasil, que en los dos últimos años ha dado buenos resultados en aspectos como la protección de los testigos y las víctimas del delito, la aprobación de leyes contra el blanqueo de capitales, la mejora de la eficacia de las sanciones y el control del comercio y de la tenencia de armas. En el plano regional, en marzo de 2002 el Brasil debatió con sus asociados de MERCOSUR los ajustes necesarios en su legislación y sus políticas de limitación de las armas de fuego y las municiones. Respecto de la lucha contra el blanqueo de capitales, en 2000 el Brasil se adhirió al Grupo Especial de Expertos Financieros sobre blanqueo

de capitales de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, institución que ha clasificado al Brasil entre los diez países que aplican cabalmente sus recomendaciones en materia jurídica, financiera y de cooperación internacional.

3. Se ha establecido una estrecha colaboración con los países vecinos para luchar con mayor eficacia contra el consumo y el tráfico ilícitos de drogas y los delitos conexos. Los delitos relacionados con las drogas fueron uno de los temas principales examinados en la primera reunión de los Presidentes de América del Sur, celebrada en el Brasil en 2000. También se han adoptado iniciativas en el contexto de la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur y la Comunidad de Países de Habla Portuguesa. En marzo de 2002, el Brasil participó en una fructífera reunión del mecanismo de coordinación y cooperación en materia de drogas entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. En el plano nacional, se ha actualizado la legislación en la materia conforme a las recomendaciones de las Naciones Unidas y se han racionalizado las estructuras administrativas, por ejemplo con la creación de la Oficina Nacional de Lucha contra la Droga. El Programa Nacional contra la Droga, iniciado en diciembre de 2001, responde a una grave preocupación de nuestra sociedad por este problema, que ha motivado una participación cada vez mayor de las entidades no gubernamentales en la lucha contra ese flagelo.

4. La demanda, la producción y el tráfico de drogas ilícitas siguen suponiendo un problema de alcance mundial. Por fortuna, cada día se es más consciente de que la lucha internacional contra las drogas es un deber común, que debe abordarse en un contexto multilateral y de forma integrada y equilibrada, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional y con pleno respeto por la soberanía y la integridad territorial de los Estados y por todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Con el apoyo continuo y firme a los programas de cooperación internacional basados en una estrategia plural, en que se tengan en cuenta los aspectos de la prevención y la rehabilitación tanto como las medidas represivas, se lograrán vencer las graves dificultades que todavía subsisten.

5. **El Sr. Gzllal** (Jamahiriya Árabe Libia) dice que las profundas transformaciones políticas, económicas y sociales a que está sujeto el mundo han dado lugar a nuevas formas de delincuencia organizada transnacional y a nuevos tipos de atentados contra los derechos y las libertades fundamentales, que pueden tener efectos

desestabilizadores en muchas sociedades y que afectan a todas las esferas de la vida. Algunos de los problemas más preocupantes son el tráfico de drogas, la trata de mujeres, niños y emigrantes, el comercio ilícito de antigüedades, el tráfico de armas y municiones, los delitos contra el medio ambiente, la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos e incluso el tráfico de órganos humanos, verdadero atentado contra la humanidad. La Jamarhiya Árabe Libia ha suscrito la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, mantiene acuerdos de cooperación bilateral con los países vecinos y participa en un mecanismo regional de lucha contra el delito transnacional y de control de las fronteras. Habida cuenta de que el Instituto Africano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente tiene el objetivo de fomentar la cooperación internacional contra ese tipo de delitos, su delegación espera que el Secretario General impulse las iniciativas para que esa institución de vital importancia para los países de África pueda obtener la financiación que necesita.

6. La corrupción es un mal que subvierte el derecho, la ética humana y el tejido económico y social y entraña un derroche de los recursos financieros en todo el mundo, y en especial en los países en desarrollo. Por ello cabe felicitarse por la labor del Comité Especial que se ocupa de preparar la Convención contra la Corrupción, labor que se prevé que estará concluida en 2003. Su país apoya este proceso y confía en que permita la adopción de medidas eficaces para prevenir las prácticas corruptas y la transferencia de fondos de origen ilícito y luchar contra ellas y para repatriar esos fondos a sus países de origen. Por otro lado, espera que no se utilice la Convención para intervenir en los asuntos internos de los países. También se felicita por los preparativos para celebrar en 2005 el 11º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, en que deben hacerse realidad los compromisos contraídos por los Estados Miembros en el marco de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la futura Convención contra la Corrupción. Es necesario asimismo luchar contra el terrorismo de Estado en todas sus formas, pues no deja de ser una forma de delincuencia organizada que amenaza al conjunto de la comunidad internacional. Sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, la comunidad internacional tiene el deber acuciante de establecer

una definición precisa de terrorismo, distinguiéndolo del derecho de los pueblos a la libre determinación y a la resistencia contra la ocupación extranjera y evitando cualquier tipo de discriminación o parcialidad en sus criterios. La comunidad internacional debe suscribir ambas Convenciones y los demás tratados internacionales análogos y estudiar mecanismos que permitan acabar con todas las formas de delincuencia transnacional.

7. **El Sr. Tesch** (Australia) dice que su país está totalmente de acuerdo con la posición adoptada en la Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia, de 2000, en que se pide que la comunidad internacional tome medidas coordinadas para solucionar los problemas planteados por la delincuencia transnacional. El tráfico y la trata de personas son dos de las principales formas de la delincuencia transnacional, y con frecuencia van acompañados de otros delitos, como la falsificación de documentos, el blanqueo de capitales y el tráfico de drogas. La Organización Internacional para las Migraciones calcula que las actividades de tráfico y trata de personas generan en todo el mundo ingresos anuales del orden de 10.000 millones de dólares de los Estados Unidos. El tráfico de personas constituye una amenaza directa contra la soberanía de los Estados, y el movimiento ilícito de demandantes de asilo menoscaba la eficacia y la integridad del sistema internacional de protección de los refugiados y puede restar apoyo público a los programas legítimos de migración. Australia ha adoptado leyes y otras medidas para reprimir, enjuiciar y condenar a los responsables de esas actividades, incautarse de los ingresos obtenidos de ellas y atender debidamente a las personas objeto de tráfico. Pero ningún país por sí solo puede acabar con un problema que, siendo internacional por su naturaleza, sólo podrá solucionarse aplicando medidas coordinadas y concertadas por medio de los canales bilaterales, regionales y multilaterales.

8. En el plano regional, el proceso iniciado en la Conferencia Ministerial Regional sobre el tráfico ilícito y la trata de personas y la delincuencia transnacional conexa, celebrada en Bali en 2002, resulta fundamental para internacionalizar la cuestión y complementar la importante labor del Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal. En la Conferencia, presidida conjuntamente por Indonesia y Australia, ministros de 38 países se comprometieron a adoptar medidas de cooperación en toda la región para poner fin al comercio de seres humanos, dando especial preponderancia a la prevención del delito. Se han

establecido dos grupos especiales de expertos, coordinados por Nueva Zelandia y Tailandia, que se ocupan del intercambio regional de información, la tipificación como delito en todos los países del tráfico de personas y la potenciación de la cooperación regional en materia policial. El aspecto más destacable del proceso de Bali es la voluntad de integrar las iniciativas regionales con otros programas de cooperación en el ámbito mundial, de acuerdo con el reconocimiento de los participantes de que el tráfico y la trata de personas suponen un problema internacional para el que hace falta una solución internacional. Los grupos de expertos presentarán informes sobre la marcha de sus trabajos a la próxima Conferencia Ministerial, que se celebrará en Bali a principios de 2003.

9. Su delegación apoya la iniciativa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de examinar el fenómeno de los movimientos secundarios de población, es decir, los casos de personas que abandonan un país en que se les ofrecía protección frente a la persecución para instalarse en otro lugar. Australia desearía también que en el sistema de las Naciones Unidas se otorgara mayor preeminencia al problema de los movimientos ilícitos de personas y que hubiera una mejor coordinación de las actividades en ese ámbito.

10. **El Sr. Chuquihuara** (Perú) comparte lo expresado en la sesión anterior por el representante de Costa Rica en nombre del Grupo de Río y reconoce la importancia de la intervención del Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID) ante la Comisión. El Gobierno y el pueblo del Perú están empeñados en llevar adelante una lucha a fondo contra el tráfico ilícito de drogas, que es uno de los peores males con que se enfrenta la humanidad y especialmente la subregión andina. No obstante, el carácter mundial de ese fenómeno exige la participación activa y permanente de toda la comunidad internacional sobre la base del principio de responsabilidad compartida. Por ello, el Perú propugna una mayor cooperación internacional mediante el establecimiento de mecanismos bilaterales y multilaterales que refuercen la respuesta a ese fenómeno multidimensional y complejo.

11. La labor realizada en este frente en el Perú durante el decenio pasado ha sido muy positiva, como demuestra el hecho de que de 125.000 hectáreas dedicadas al cultivo de coca en 1990, hoy quedan unas 34.000 hectáreas. Diversos factores contribuyeron a este logro, entre ellos, una eficiente interdicción aérea,

la derrota de los grupos terroristas, la drástica caída del precio de la hoja de coca y el consiguiente proceso de abandono del cultivo de la coca. Sin embargo, desde 1999, se han producido varios acontecimientos con importantes repercusiones en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas: se ha iniciado un aumento de los precios que incide negativamente en el proceso de abandono de cultivos; se ha producido un apreciable aumento de la pobreza en el país; y ha surgido un descontento entre los agricultores que cultivan coca respecto de los programas de desarrollo alternativo, por lo que la erradicación empieza a ser objeto de una fuerte oposición.

12. Ante esta situación, el Gobierno del Perú ha redoblado sus esfuerzos y ha desarrollado una estrategia integral en cuatro ejes interdependientes (interdicción; desarrollo alternativo; autoerradicación y erradicación; y prevención del consumo de drogas) con el fin de neutralizar el tráfico ilícito de drogas en el país mediante la reducción del precio de la hoja de coca, la disminución creciente de las zonas cultivadas, la elevación del nivel de vida de los campesinos de las zonas productoras de coca y el mantenimiento de la paz y la seguridad en el país. La interdicción sigue siendo una importante herramienta para interceptar las rutas de salida de la droga y facilitar la destrucción de laboratorios y el control de los precursores químicos utilizados en la elaboración de clorhidrato de cocaína. El desarrollo alternativo, otra herramienta fundamental, está destinado a reducir la pobreza en las zonas productoras de coca mediante la promoción de actividades económicas sostenibles y lícitas. Se ha introducido un componente nuevo en el proceso de erradicación y autoerradicación que consiste en el pago de jornales, el apoyo alimentario y el apoyo a proyectos productivos y obras comunales con miras a reducir el conflicto social. En lo que respecta a la prevención del consumo, se están adoptando medidas para reducir el consumo interno y mejorar los servicios de atención a los toxicómanos con el fin de lograr su plena reinserción social.

13. En este contexto, hay que destacar que en muchos países de la región se ha hecho impostergable atender a las crecientes demandas sociales, que surgen como consecuencia del necesario establecimiento de políticas económicas, pero que podrían hacer inviables los objetivos de la lucha contra el tráfico de drogas y poner en peligro la gobernabilidad democrática.

14. Por último, el orador pone de relieve la importancia de promover canales estables para las corrientes de inversión y de dar acceso preferencial a los productos de los países que se enfrentan al problema del cultivo y el tráfico ilícito de drogas. A ese respecto, celebra el reciente restablecimiento de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, aprobada finalmente por el Congreso de los Estados Unidos de América.

*Se levanta la sesión a las 15.45 horas.*